



INESLE

INSTITUTO
DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS

ENERO 2026

S Í N T E S I S

LUCHAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL SEXENIO OBRADORISTA (2018-2024)

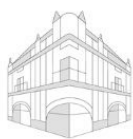
MASSIMO MODONESI, CÉSAR ENRIQUE PINEDA Y
SERGIO TAMAYO



Massimo Modonesi es un historiador, sociólogo y politólogo italiano radicado en México, especializado en movimientos sociopolíticos en América Latina y debates marxistas. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con maestría en la misma institución y doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad La Sapienza de Roma. Profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) nivel II.

César Enrique Pineda, sociólogo y activista mexicano, con doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestría en Estudios Latinoamericanos y licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Profesor-investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y profesor de asignatura en la FCPyS de la UNAM. Miembro del SNII nivel I.

Sergio Tamayo es sociólogo, urbanista y arquitecto mexicano. Doctor en Sociología por la University of Texas, en Austin, con maestría en Urbanismo por la UNAM y licenciatura en Arquitectura por la UAM. Profesor-investigador en el Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco.



CONGRESO

ESTADO DE MÉXICO



INESLE

INSTITUTO
DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS

SUMARIO

Presentación II

La pax obradorista. Contenido de la lucha social y gobernabilidad progresista (Massimo Modonesi) 13

La conflictualidad del movimiento sociopolítico de la derecha mexicana (Sergio Tamayo) 31

Trabajadores, campesinos y maestros

Luchas obreras y participación política y sindical durante el sexenio obradorista (Pablo Langer Oprinari) 61

Cambio de coordenadas. Radiografía de la movilización social en el campo mexicano durante el sexenio obradorista (2018-2024) (Fleur Gouttefanjat) 83

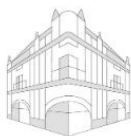
La CNTE: autonomía y movilización en el marco de una hegemonía progresista (Joel Ortega) 109

Protestas universitarias y resistencia: entre la política educativa del sexenio obradorista y las demandas pendientes (Mariana Morales) 133

Mujeres y movimientos encabezados por víctimas

Movimiento de mujeres: entre la institucionalización y la revuelta (Yara Almonte Villaseñor) 165

De la esperanza a la desconfianza: el movimiento liderado por víctimas durante el sexenio obradorista (2018-2024) (Mario Jesús Arellano González y Juan Sebastián Granada-Cardona)..... 187



Movimientos indígenas

El movimiento indígena en el sexenio obradorista. Luchas por la autonomía, defensa del territorio y la vida (César Enrique Pineda y Gustavo M. de Oliveira) 221

Autonomías indígenas en el sexenio obradorista: Cherán y el zapatismo, entre la autodeterminación y el transformismo (Edgars Martínez Navarrete y Andrea Cesaroni) 273

Antagonismo, movilización social y megaproyectos de infraestructura. El Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos en el sexenio obradorista (Bianca Bachelot y Sergio Barranco González) 307

Participación política a la derecha y a la izquierda

De las calles a la movilización electoral: la participación política en el obradorismo (Daniel Arturo Sánchez Díaz) 347

¿Más allá del obradorismo? El Instituto Nacional de Formación Política y la participación política en Morena (Berenice Ortega Bayona) 367

La participación política de las derechas en el sexenio obradorista (Sergio Tamayo) 385

Epílogo. La elección presidencial de 2024

Las organizaciones sociales frente al proceso electoral del 2024 y las candidaturas de Morena (Joel Ortega Erreguerena y Massimo Modonesi) 417

El triunfo de Claudia Sheinbaum y la derrota del movimiento de oposición de derecha. Una etnografía situacional (Guadalupe Olivier, Sergio Tamayo, Israel Flores) 439



CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO



INESLE
INSTITUTO
DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS



Título: *Luchas sociales y participación política en el sexenio obradorista (2018-2024)*

Coordinadores: Modonesi, Massimo; Pineda, César Enrique, y Tamayo, Sergio

Autores: Almonte Villaseñor, Yara; Arellano González, Mario Jesús; Bachelot, Bianca; Barranco González, Sergio; Cesaroni, Andrea; Flores, Israel; Gouttefanjat, Fleur; Granada-Cardona, Juan Sebastián; Langer Oprinari, Pablo; Martínez Navarrete, Edgars; Modonesi, Massimo; Morales, Mariana; Oliveira, Gustavo M. de; Ortega, Joel; Ortega Bayona, Berenice; Olivier, Guadalupe; Pineda, César Enrique; Sánchez Díaz, Daniel Arturo; Tamayo, Sergio.

Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Año: 2025

Ciudad: Ciudad de México

Páginas: 466





CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO



INESLE
INSTITUTO
DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS

PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS

Luchas sociales y participación política en el sexenio obradorista (2018-2024) es una obra colectiva coordinada por Massimo Modonesi, César Enrique Pineda y Sergio Tamayo, cuyo propósito central es analizar cómo cambiaron las dinámicas de protesta, movilización y participación política en México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El libro parte de una hipótesis clara: la llegada de un gobierno progresista alteraría los patrones de acción colectiva, ya sea fomentando nuevas formas de participación o inhibiéndolas. La investigación —sustentada en una base de datos de aproximadamente 6 000 eventos de protesta registrados entre 2018 y 2024— ofrece un balance complejo, marcado por luces y sombras.

—La pax obradorista: contención y apaciguamiento del conflicto social. Modonesi sostiene que durante el sexenio se configuró lo que denomina “pax obradorista”, un periodo de relativa pacificación social y baja conflictividad, no porque las desigualdades hayan desaparecido, sino por una combinación de factores: centralización del poder en la figura presidencial y en las estructuras de Morena; programas sociales que mitigaron demandas inmediatas pero a la vez generaron dependencia y redujeron la conflictividad; negociación constante como mecanismo de desactivación de tensiones, y transformismo de liderazgos sociales previamente combativos que fueron integrados al aparato gubernamental. El resultado fue una notable reducción del antagonismo social, particularmente en sectores históricamente movilizados (campesinos, sindicatos, organizaciones populares), con excepciones relevantes como la agenda feminista, movimientos territoriales y luchas de víctimas.

—Reconfiguración de las derechas. Sergio Tamayo expone cómo, tras la derrota de 2018, las derechas mexicanas, fragmentadas y debilitadas, atravesaron un proceso de recomposición. Surgieron expresiones de derecha radical y ultraderecha, con picos de movilización en casos como el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAA), marchas “en defensa” del Instituto Nacional Electoral (INE), así como movilizaciones anti 4T vinculadas a orga-



nizaciones empresariales y grupos conservadores. Estas movilizaciones fueron ruidosas mediáticamente, pero insuficientes para construir una oposición social o electoral sólida.

– Sectores clave de movilización social. 1) Trabajadores y sindicatos: se identifican luchas focalizadas (automotriz, minero-metalúrgica, trabajadores del Estado), pero sin un ciclo ascendente de movilización ni avances estructurales en democratización sindical. 2) Campesinos: el campo vivió un cambio de coordenadas, con menos movilización autónoma y mayor negociación institucional, y con organizaciones divididas entre apoyo moderado, autonomía crítica y cooperación estratégica. 3) Movimiento magisterial: la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aparece como uno de los pocos actores con capacidad real de presión, aunque su relación con el gobierno osciló entre negociación y confrontación limitada. 4) Universidades: las protestas universitarias fueron puntuales y dispersas, sin adquirir la fuerza de ciclos pasados.

–Mujeres y víctimas: los focos más dinámicos. El movimiento feminista constituyó la fuerza social más potente del sexenio, con momentos de irrupción masiva (8M 2020, tomas de instalaciones, protestas contra violencia feminicida). Aunque luego se experimentó un descenso relativo, el feminismo mantuvo autonomía, agenda propia y capacidad disruptiva. Los movimientos de víctimas, en especial los vinculados a desaparición forzada (Ayotzinapa y colectivos de búsqueda), sostuvieron una crítica persistente al gobierno, convirtiéndose en uno de los contrapesos morales más sólidos frente al discurso oficial.

–Movimientos indígenas y resistencias territoriales. La resistencia a megaproyectos —Tren Maya, Proyecto Integral Morelos— reveló tensiones fuertes entre la retórica progresista y las prácticas desarrollistas del gobierno. Cherán y el zapatismo destacan como modelos de autonomía persistente, parcialmente aislados de la lógica de cooperación estatal.

–Participación política en Morena y en la derecha. Se documenta la transición de Morena desde un movimiento social a un partido institucionalizado, con creciente disciplina interna y canales limitados de participación autónoma; el papel marginal y debilitado del Instituto Nacional de Formación Política (INFP); la consolidación de una lógica clientelar como forma dominante de vinculación entre partido, gobierno y sectores populares, así como la incapacidad de la derecha para movilizar bases sociales más allá de episodios aislados.



CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO



INESLE
INSTITUTO
DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS

–La coyuntura electoral de 2024. El epílogo describe cómo las organizaciones sociales se posicionaron frente a la candidatura de Claudia Sheinbaum y cómo, desde una etnografía de cierres de campaña, el obradorismo logró capitalizar su hegemonía social. La oposición, aunque estridente mediáticamente, mostró debilidad organizativa.

–Conclusiones generales. La conclusión que emerge de todas estas líneas es clara: el sexenio obradorista estuvo marcado por una paradoja. Por un lado, logró estabilidad política, reducción de la conflictividad y altos niveles de legitimidad. Por otro, esa estabilidad ocultó un debilitamiento de la movilización autónoma y una disminución del antagonismo social que podría resultar engañosa. La pax obradorista funcionó como un paréntesis, un momento de calma que no necesariamente resuelve las tensiones profundas del país. La esperanza social, los programas asistenciales, la capacidad de negociación y la autoridad política de AMLO lograron contener la protesta, pero no eliminaron las causas estructurales del malestar. De ahí que los autores planteen una advertencia: la participación popular no fue fortalecida y la autonomía social se redujo; por tanto, el porvenir de la movilización dependerá de la manera en que se reconfiguren expectativas y condiciones bajo la nueva presidencia, por lo que se sugiere que esta pacificación podría ser temporal. Conforme avance la normalización del régimen y se diluya la figura carismática del líder, las contradicciones volverán a aparecer.

El sexenio obradorista, más que una transformación profunda del campo de la acción colectiva podría haber sido un momento suspendido, sostenido por un liderazgo excepcional y por un pacto social tácito. El futuro mostrará si esta calma se consolida o se rompe.

ENERO 2026



CONGRESO

ESTADO DE MÉXICO



INESLE

INSTITUTO
DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS

SÍNTESIS

SÍNTESIS

Presentación

Se explica que el libro reúne los resultados de una investigación colectiva, financiada por la UNAM, sobre las dinámicas de protesta social y participación política durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El punto de partida fue la hipótesis de que la llegada de un gobierno progresista modificaría, al menos parcialmente, los patrones de comportamiento social y que esa variación sería clave para evaluar el alcance real de la llamada Cuarta Transformación. Para ello, el equipo construyó una base de datos con alrededor de 6 000 eventos de protesta ocurridos entre diciembre de 2018 y el fin del sexenio, clasificados por fecha, tipo de actor, tipo de protesta, movimiento involucrado y otros datos descriptivos. A pesar de las simpatías y antipatías que despierta el obradorismo, el proyecto se propuso mantener una mirada rigurosa y crítica, asumiendo la crítica como parte del conocimiento como vocación de incidencia social y política. Por eso, el balance que ofrece el libro sobre movilización en este periodo es matizado con claroscuros y elementos contradictorios cuya interpretación depende también de quien lee.

El volumen se organiza en 16 capítulos, reelaboraciones de ponencias presentadas en un coloquio realizado en mayo de 2024 en la FCPyS de

la UNAM. Tras dos textos introductorios a cargo de Modonesi y Sergio Tamayo, la primera parte aborda las movilizaciones de trabajadores, campesinos y magisterio; la segunda, los movimientos de mujeres y de víctimas. Luego se abre un bloque dedicado a los movimientos indígenas, con un capítulo general y estudios específicos sobre Cherán, el zapatismo y las resistencias al Tren Maya y al Proyecto Integral Morelos. Más adelante se analizan experiencias de participación política en la izquierda y la derecha, a través de Morena y las movilizaciones de las derechas. El libro cierra con un epílogo sobre la coyuntura electoral de 2024: por un lado, se examinan los posicionamientos de organizaciones sociales frente a la candidatura de Claudia Sheinbaum; por otro, se ofrece una lectura etnográfica de los cierres de campaña de las dos principales coaliciones.

La pax obradorista. Contención de la lucha social y gobernabilidad progresista (Massimo Modonesi)

Modonesi sostiene que el rasgo más llamativo del sexenio de López Obrador no fue una explosión de la movilización popular, sino, contrariamente, una etapa de contención del conflicto social que él llama “pax obradorista”. En lugar de medir a la 4T solo por sus políticas sociales, su desempeño económico o la disputa entre neodesa-

rollismo y ambientalismo, propone tomar como criterio central qué tipo de participación, organización y lucha de las clases subalternas se generó o se inhibió durante estos años. Desde una perspectiva marxista y gramsciana, la pregunta clave no es solo quién gobierna o qué programas reparte, sino qué tanto se activa la capacidad autónoma de acción de los de abajo.

Según el autor, el obradorismo combina un discurso que polariza simbólicamente —“el pueblo” contra “la oligarquía”, la élite corrupta frente al “pueblo bueno”— con una práctica política que busca, en los hechos, conciliar intereses y moderar el conflicto. No impulsa una política de confrontación de clase, sino de recomposición interclasista del bloque popular. De ahí que, en términos de conflictividad social, el sexenio no produjo un nuevo gran ciclo de luchas comparable a los momentos de 1988, 1994, el conflicto poselectoral de 2006 o las movilizaciones por Ayotzinapa. Hubo protestas, sí, pero más bien parciales, aisladas y acotadas.

El texto destaca algunas resistencias que escapan parcialmente a esa contención: la CNTE, que no abandona del todo su tradición combativa; los padres de los 43 de Ayotzinapa, que pasan de la expectativa al desencanto con el gobierno; el movimiento feminista, que vive importantes picos de

movilización y luego cierta disminución, y luchas locales contra megaproyectos y dinámicas extractivistas. Pero en general, en el mundo del trabajo, el campesinado, los barrios populares urbanos o las universidades no aparece un nuevo impulso articulador de movimientos. La figura del “movimiento social” como sujeto con capacidad de desbordar al Estado se encuentra debilitada.

Para explicar la pax social, Modonesi combina dos planos. Por un lado, pesa la propia condición subalterna: el cansancio, la fragmentación, la herencia de prácticas corporativas y clientelares, el individualismo y el consumismo, la desarticulación organizativa después de varios ciclos frustrados de lucha. Por otro lado, identifica mecanismos específicos de contención desde el gobierno de la 4T. Entre ellos, la concentración de poder político alrededor de la figura presidencial de Morena como aparato electoral y estatal; la participación política encauzada sobre todo hacia las urnas, las consultas diseñadas desde arriba y las movilizaciones convocadas por el propio gobierno; y la construcción de una ciudadanía que se moviliza a favor del líder más que desde espacios autónomos.

Un elemento clave es el transformismo de liderazgos sociales: dirigentes que antes provenían de la protesta y

del campo popular pasan a ocupar cargos públicos o posiciones dentro de la estructura de gobierno y del partido. Inspirado en Gramsci, Modonesi describe esto como una forma de “decapitación” de las clases subalternas: quienes antes organizaban la lucha ahora gestionan la contención del conflicto. El efecto no es solo cooptación personal, sino reorientación del sentido mismo de la participación: de la confrontación y la autonomía hacia la lealtad, la negociación y la administración.

A esto se suma el papel de las políticas sociales. Los programas de apoyo —que tienen sin duda efectos redistributivos y de alivio material— funcionan también como dispositivos de apaciguamiento y, en muchos casos, de clientelismo político. Figuras como los “siervos de la nación” y la estructura territorial asociada a los programas recrean lógicas priistas: vínculos verticales de dependencia, lealtad y gratitud que desincentivan la protesta abierta. Aunque algunos programas incorporan formalmente mecanismos participativos, estos tienden más a canalizar y disciplinar la energía social que a potenciar una organización autónoma y antagonista. Cuando estallan conflictos, la respuesta principal es la negociación y el acuerdo antes que la represión abierta: esto diferencia al obradorismo de gobiernos anteriores, pero también hace más eficaz la desactivación progresiva del conflicto.

En este marco, Modonesi ubica a la 4T como un experimento de “progresismo tardío” más que como una verdadera revolución pasiva en sentido gramsciano. Hay rasgos de revolución pasiva —transformismo pasivización de las bases, reacomodo del vínculo Estado-sociedad—, pero no surgen como respuesta defensiva a un gran ascenso previo de luchas populares, sino sobre un movimiento social ya desgastado. La 4T aparece más como un reformismo de conciliación de clases, con componentes nacional-populares y rasgos conservadores que como un proceso que empuje a las clases subalternas a una nueva etapa de autoorganización y confrontación estructural.

El balance final es ambivalente: la pax obradorista es real pero frágil. La hegemonía que sostiene al gobierno es amplia, pero no necesariamente sólida; se apoya en la combinación de redistribución, liderazgo carismático y contención del conflicto, más que en una transformación profunda de las relaciones sociales y políticas. Modonesi advierte que el tránsito hacia una etapa de “normalización” bajo un gobierno de corte más tecnocrático y socialdemócrata, sin el carisma plebeyo de López Obrador, puede exponer las grietas de esa paz social. Lo que hoy aparece como estabilidad podría revelarse, con el tiempo, como un paréntesis entre oleadas de descontento más

profundas en la disputa por la autonomía y el protagonismo político de las clases subalternas.

La conflictualidad del movimiento sociopolítico de la derecha mexicana (Sergio Tamayo)

El texto de Sergio Tamayo parte de una idea clara: así como hubo pax obradorista del lado popular, del otro lado del conflicto se fue gestando, durante el sexenio, un movimiento sociopolítico de derechas que intentó reorganizarse para recuperar el poder perdido en 2018. La derecha mexicana —en plural “las derechas”— llegó a ese año devastada, fragmentada y desorientada, después de tres décadas de hegemonía neoliberal construida desde los años ochenta, cuando el empresariado se organizó políticamente (Consejo Coordinador Empresarial, Confederación Patronal de la República Mexicana, Manifiesto de Cancún) y se tejió la convergencia entre la derecha del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), en sintonía con la ola global de Reagan, Thatcher y Juan Pablo II. Esa larga fase, pasando por el salinismo, la alternancia panista y el “nuevo PRI” peñista, significó la instalación de la derecha como forma de gobierno durante unos treinta años. La elección de 2018 marca, para Tamayo, el colapso de esa arquitectura y la irrupción

de un proyecto posneoliberal encabezado por López Obrador.

El autor retoma la idea obradorista de una “revolución de las conciencias” y la toma en serio: no fue solo un voto de castigo racional contra la corrupción, sino el desenlace de un largo proceso de politización popular que venía gestándose desde hacía décadas, alimentado de fraudes, resistencias y movilizaciones —del Partido de la Revolución Democrática (PRD) original, el desafuero, el plantón de 2006, la Convención Democrática, el nacimiento de Morena como movimiento—. Esa revolución de las conciencias habría desplazado buena parte de la subjetividad popular del consenso neoliberal hacia un progresismo nacional-popular y posneoliberal, aunque no socialista ni anticapitalista. Sin embargo, Tamayo subraya que ese salto fue sobre todo de conciencia y de orientación política de no transformación estructural: la 4T se queda corta cuando se trata de traducir el discurso en cambios profundos en las relaciones de explotación y dominación. A ello se suma un proceso de sustitución: Morena-movimiento cede su lugar a Morena-partido, y la fuerza de las masas se va “administrando” desde el aparato estatal y la coalición obradorista, generando aquellos fenómenos que Modonesi lee como revolución pasiva y pax obradorista, es decir, una desmovilización relativa de



los de abajo para no poner en riesgo la gobernabilidad del cambio.

Para discutir esa supuesta “revolución pasiva”, Tamayo introduce un giro: si queremos entender bien lo que pasó en el sexenio, no basta mirar la contención del movimiento popular, hay que observar la conflictualidad del lado de la derecha. Sostiene que el clivaje central de estos años fue la confrontación entre el progresismo obradorista y un movimiento de oposición de derechas que se fue articulando como actor colectivo. Ese movimiento se monta sobre una larga operación ideológica: negación de la dicotomía izquierda/derecha; borrado de la lucha de clases bajo el discurso de la “transición democrática” y del fin de los grandes antagonismos; debilitamiento de sindicatos; exaltación del individualismo, la propiedad privada y el consumo como signo de éxito. Al mismo tiempo, a nivel global, la crisis de gobernanza y las respuestas autoritarias de gobiernos democráticos—sobre todo en pandemia— abren ventanas de oportunidad para derechas radicales y extremas; en América Latina, se combinan con campañas de deslegitimación y golpes blandos contra gobiernos progresistas.

En el caso mexicano, Tamayo distingue una derecha radical y una ultraderecha. La primera encarna en buena medida en el PAN y su entorno em-

presarial e intelectual; se asume como defensora del Estado de derecho, de las libertades individuales, de la apertura de mercados, del capital privado y de la familia como núcleo moral; se reivindica “de derecha, pero no de ultraderecha”. La segunda, la extrema derecha, congrega a grupos clasistas, misóginos, racistas, homófobos y fundamentalistas religiosos, articulados en dispositivos como FRENAA, el Frente Nacional por la Familia, el Yunque, sectores evangélicos y redes católicas conservadoras. Ambas corrientes comparten un mismo campo ideológico, pero difieren en estilo, lenguaje y grado de radicalidad. El movimiento opositor de derecha es, para Tamayo, un entramado de cámaras empresariales, partidos (PAN, PRI, PRD y aliados), ONG, think tanks, universidades privadas, medios y liderazgos de opinión que convergen coyunturalmente. No son “naturalmente” un movimiento social, pero las condiciones de 2018 los empujan a actuar como tal, buscando unidad en la acción a pesar de sus diferencias internas.

Esa unidad no descansa en un programa positivo coherente, sino en un odio compartido hacia AMLO como figura emblemática de la transformación. Tamayo recurre a James Jasper para subrayar que la política contemporánea se juega en buena medida en el terreno de las emociones: la derecha mexicana se alimenta de resentimien-

to por la pérdida de sus privilegios políticos y simbólicos, y moviliza hacia López Obrador y su círculo un paquete de emociones negativas —desdén, desprecio, miedo, repugnancia— que se difunde en amplios sectores de la clase media. Ese odio funciona como cemento para coaligar a neoliberales duros, conservadores religiosos, “ciudadanistas” antipopulistas y socialdemócratas desplazados, como el PRD residual. La paradoja es que partidos con historia y principios distintos (como el PRD, en teoría socialdemócrata) terminan aliados con la derecha radical por una mezcla de cooptación, crisis de liderazgo y resentimientos acumulados.

El texto muestra cómo este movimiento opositor ha seguido, con matices, el guion de los golpes blandos documentados en América Latina (Honduras, Paraguay, Brasil): campañas masivas de desprestigio mediático, narrativas de “autoritario” y “destructor de la democracia”, intentos de *lawfare*, uso de los poderes Legislativo y Judicial como instrumentos de bloqueo y eventual destitución. En México, esto se expresa en etiquetas como “narcopresidente” o “narcoestado”, en libros y columnas que presentan a AMLO como psicópata y tirano en ciernes y en la insistencia en que busca un “maximato” con Claudia Sheinbaum. El objetivo es erosionar la legitimidad del gobierno y restarle base social. La

diferencia con otros países, subraya Tamayo, es que en México estos esfuerzos no lograron cuajar en un golpe parlamentario o judicial, en parte por la capacidad del obradorismo para articular redes de apoyo político, mediático y popular y por la relación cuidadosamente administrada con las fuerzas armadas.

En las consideraciones finales, el autor retoma a McAdam, Tarrow y Tilly para recordar que la contienda política nunca es puramente institucional ni puramente callejera: se combina con repertorios que van de las campañas electorales y los debates legislativos a las marchas, plantones y acciones disruptivas. La derecha mexicana, derrotada y desarticulada en 2018, decide apostar por la “unidad en la acción” y se constituye en un movimiento antagónico frente al gobierno progresista, desplegando recursos económicos, mediáticos, jurídicos y electorales para tratar de frenar o revertir la 4T. Logra reorganizarse y levantar la cabeza, pero no lo suficiente para impedir nuevas derrotas contundentes en 2024.

En suma, el capítulo dibuja el otro polo del conflicto del sexenio: mientras el obradorismo administra una fase de pacificación relativa de la protesta popular, las derechas pasan, según Tamayo, de forma de gobierno a movimiento sociopolítico opositor, intensamente activo, articulando en

torno a la defensa del orden neoliberal y a la agresiva deslegitimación del proyecto posneoliberal mexicano.

Trabajadores, campesinos y maestros

Luchas obreras y participación política y sindical durante el sexenio obradorista (Pablo Langer Oprinari)

El autor analiza cómo se comportaron las luchas obreras, la participación sindical y la política laboral durante el sexenio de López Obrador, mostrando una combinación de reformas “progresistas” con continuidades estructurales del capitalismo dependiente y una pasivización relativa de la lucha de clases.

Se destaca que, en el plano institucional, el gobierno impulsó aumentos importantes del salario mínimo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la regulación del *outsourcing*, más días de vacaciones, la regularización de trabajadoras del hogar y, sobre todo, la reforma laboral de 2019 (voto libre para direcciones sindicales, legitimación de contratos colectivos, creación del Centro Federal de Conciliación, etcétera), fuertemente vinculada a las exigencias del T-MEC y al combate al “*dumping social*”. Estas medidas generaron expectativas y simpatía entre amplios sectores de trabajadores y fueron percibidas como ruptura con las políticas abiertamente antiobreras

de los sexenios neoliberales. Sin embargo, sus efectos están acotados: solo una fracción del empleo formal recibe el salario mínimo reforzado, la subcontratación se reconfigura, pero no desaparece, y la precariedad, la informalidad (más del 55 % de la población ocupada) y los bajos salarios siguen siendo pilares del modelo de acumulación.

En el terreno sindical, la mayoría de las grandes centrales históricamente ligadas al PRI (Confederación de Trabajadores de México [CTM], Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos [CROC], Confederación Regional Obrera Mexicana [CROM], Congreso del Trabajo) terminaron acercándose al obradorismo, pese a tensiones puntuales, y validaron su política laboral. A la vez surgió un sindicalismo orgánicamente vinculado a Morena (Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana; Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México [CATEM], etcétera), que disputa contratos y crece en zonas industriales del norte. Incluso sectores del llamado sindicalismo democrático (Unión Nacional de Trabajadores [UNT], Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana [STRM], UNAM) apoyaron la reforma y buscaron “profundizarla”, combi-

nando críticas parciales con diálogo cercano con el gobierno. El contraste lo marca la CNTE, que pasó de cierta expectativa inicial a una posición abiertamente crítica, protagonizando paros nacionales en 2024 y manteniendo independencia frente a las elecciones. Como resultado, la mayoría de las conducciones se alinean con la 4T, evitan la confrontación abierta y contribuyen a la desmovilización y subalternización de sus bases.

El autor destaca, sin embargo, que aún en este contexto de baja conflictividad general hubo momentos de fuertes luchas. Destaca la oleada de huelgas de Matamoros en 2010 (movimiento 20/32), con decenas de maquiladoras paralizadas, demandas de aumento salarial y bono, y una fuerte confrontación con los viejos liderazgos charros, de la que surge el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios (SNITIS). Ese mismo año, se combinaron huelgas en universidades (UAM, Chapingo, Colegio de Bachilleres), paros de la CNTE en Michoacán y conflictos en supermercados y tiendas como Walmart o Soriana. Otro pico se da al inicio de la pandemia (2020), con protestas en maquilas del norte y en el sector salud por falta de insumos, contagios y exigencia de cerrar con pago íntegro de salarios. Más adelante aparecen conflictos prolongados y sectoriales: la larguísima huelga de Notimex, el mo-

vimiento “UNAM no paga”, las luchas de trabajadores precarios de la Secretaría de Cultura y otras dependencias públicas, así como la huelga de Audi en 2024.

La reforma laboral abrió además un ciclo de participación sindical específica en torno a la legitimación de contratos colectivos: se sometieron a consulta poco más de 20 000 contratos colectivos de trabajo y más de 100 000 caducaron por no legitimarse, aunque apenas el 0.2 % fue rechazado formalmente. Esto muestra que el grueso del andamiaje “charro” se mantuvo y que muchas legitimaciones se hicieron a modo. No obstante, en algunos casos la negativa a legitimar contratos permitió el surgimiento o consolidación de nuevos sindicatos “independientes” (SNITIS, Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz [SINTTIA], Saint-Gobain), al tiempo que centrales como la CATEM aprovecharon la coyuntura para desplazar a la CTM en ciertas plantas. Se generan así procesos localizados de democratización sindical y mejoría relativa de condiciones, pero en tensión con la cooptación, el apoyo al gobierno y la influencia de actos externos (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales [AFL-CIO], mecanismos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá [T-MEC]).



Así, finalmente, Langer Oprinari sostiene que el sexenio obradorista se caracterizó por una “pasivización relativa” de la lucha de clases; menos grandes oleadas de movilización nacional y más conflictos sectoriales aislados y de alcance limitado. La combinación de políticas laborales progresistas, acompañadas de fuertes continuidades estructurales, y el alineamiento de la mayoría de las dirigencias sindicales con la 4T refuerzan la hegemonía gubernamental sobre el movimiento obrero y profundizan la subalternidad. Al mismo tiempo, las experiencias de lucha en maquila, industria automotriz, sector público y educación muestran una tendencia incipiente hacia la autonomía y la democratización sindical, aún débil y fragmentada. El texto cierra planteando que el gran desafío hacia el sexenio de Sheinbaum será si estos procesos permiten romper la subalternidad consolidada bajo el obradorismo y avanzar hacia una mayor independencia de clase.

Cambio de coordenadas. Radiografía de la movilización social en el campo mexicano durante el sexenio obradorista (2018-2024) (Fleur Gouttefanjat)

El texto de Fleur Gouttefanjat analiza cómo han cambiado las formas de movilización social en el campo mexicano durante el sexenio de López Obrador, a partir de la reorientación de la política agropecuaria y del rediseño de las alianzas entre Estado, campesinado y agroempresarios. La autora parte de dos grandes ciclos históricos: el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, sostenido en un amplio campesinado productor de alimentos baratos y articulado mediante un fuerte corporativismo (Confederación Nacional Campesina, Unión General de Obreros y Campesinos de México, CCI, CAP, etcétera), y el ciclo neoliberal, que desmantela esa arquitectura, privatiza sectores estratégicos y reorienta el campo hacia la agroexportación, debilitando los viejos acuerdos de clase y generando nuevas organizaciones campesinas por fuera del PRI-PAN.

Advierte que, con la llegada de la 4T, muchas organizaciones rurales de izquierda se vuelven base política de López Obrador (Plan de Ayala Siglo XXI) ante la promesa de rescatar la agricultura campesina y avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria. La nueva política se estructura, entonces, en cuatro grandes pilares: priorizar a pequeños productores, desplegar grandes programas (Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, precios de garantía, fertilizantes, etcétera), impulsar enfoques agroecológicos y eliminar el intermediarismo en la entrega de recursos, canalizando apoyos de forma directa vía Banco del Bienestar.

Este rediseño provoca una recomposición de la protesta. Por un lado, actores antes cobijados por los gobiernos priistas y panistas —viejas centrales corporativas y organizaciones vinculadas al CAP y al agroempresariado— pasan a encabezar manifestaciones contra los recortes a organizaciones y contra el redireccionamiento del presupuesto (2019-2020), así como contra la exclusión de la agricultura comercial de ciertos apoyos (caso maiceros del norte y demanda de ampliar precios de garantía). Por otro lado, muchas organizaciones campesinas históricamente ligadas a la izquierda cercanas al obradorismo optan por el silencio o la crítica muy moderada: dan el beneficio de la duda al nuevo gobierno, temen favorecer a la derecha y se mueven en la tensión permanente entre apoyo, diálogo crítico y conflicto.

La autora muestra que el problema no es solo político, sino también presupuestal y de diseño. Aunque el gasto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural crece después de 2020 y los padrones de beneficiarios son los más amplios desde 1982, la cobertura sigue siendo limitada en términos de autosuficiencia y de inclusión: Sembrando Vida cubre alrededor del 13 % de los pequeños productores, concentrados sobre todo en el sur del país. La política apuesta fuerte por pequeños y medianos productores de subsistencia, pero deja fuera a muchos media-

nos y grandes productores que son clave para el abasto interno de granos, lo que ayuda a explicar que no haya avances significativos en autosuficiencia de maíz blanco, frijol, carne y huevo, y que incluso se haya deteriorado la de arroz y maíz amarillo.

Un tercer eje del análisis son los candados del libre comercio. El T-MEC mantiene la lógica de la agricultura como captadora de divisas, refuerza la dependencia de mercados externos y fortalece a las grandes agroindustriales transnacionales. En este marco se multiplican conflictos localizados: cafecultores frente a Nestlé y AMSA; productores de trigo, azúcar y cebada frente a grandes empresas como Grupo Modelo, y jornaleros agrícolas sometidos a condiciones laborales precarias en campos de exportación (caso San Quintín). La autora subraya que aun con ciertas reformas laborales recientes para jornaleros, no existe un programa social específico para ellos y que buena parte ni siquiera puede acceder a los programas porque no poseen tierra.

En las conclusiones se plantea que la movilización rural bajo la 4T es “peculiar”: surgen nuevos opositores (organizaciones antes oficialistas) y se retraen las organizaciones campesinas progubernamentales, que no han logrado construir una crítica articulada ni una estrategia propia frente a



un gobierno que a la vez les ofrece respuestas parciales y las margina de los espacios de decisión. La política agropecuaria acierta al buscar saldar la deuda histórica con el campesinado, pero resulta insuficiente para rescatar integralmente el campo y avanzar en soberanía alimentaria. El reto, según Gouttefanjat, es doble: ampliar la inclusión (pequeños y medianos jornaleros y, de manera regulada, grandes productores) y aflojar la camisa de fuerza del libre comercio, que limita la capacidad del Estado para reorganizar de fondo el modelo agroalimentario.

La CNTE: autonomía y movilización en el marco de una hegemonía progresista (Joel Ortega)

Joel Ortega examina cómo se ha comportado la CNTE durante el sexenio de López Obrador, en tensión permanente entre su cultura de autonomía y una nueva hegemonía progresista en el gobierno. El argumento central es que, pese a un contexto general de desmovilización social y a una fuerte legitimidad obradorista, la CNTE logró preservar su independencia política y su estrategia histórica de movilización–negociación–movilización, culminando en el paro nacional de 2024.

Primero se repasan los rasgos del sindicalismo magisterial: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como aparato corporativo,

vertical y negociador frente a la CNTE como corriente disidente, basista y movimientista, con organización regional, asambleísmo, consulta permanente a las bases y el principio de independencia frente a partidos y gobierno. En estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, la CNTE ha construido estructuras propias, con secciones democráticas y prácticas que combinan sindicalismo de movimiento social y elementos comunitarios.

Luego se describe la relación con el gobierno federal en tres etapas. En la primera (2018-2019) hay acercamiento: AMLO promete abrogar la reforma educativa de 2013, se reúne por primera vez con la CNTE como interlocutor nacional y se aprueba una nueva reforma en 2019. Sin embargo, esta mantiene la lógica de evaluación y varios elementos de continuidad neoliberal, generando decepción: se suavizan aspectos punitivos, pero no se cumple la expectativa de una ruptura de fondo. Aun así, en esos años disminuyen las grandes movilizaciones nacionales y se habla de “revolución pasiva” y pasivización del magisterio, aunque persisten conflictos locales.

En la segunda etapa el vínculo se deteriora: la pandemia visibiliza desigualdades (críticas a Aprende en Casa y a la educación en línea), se acumulan problemas laborales y salariales y el presidente deja de recibir



a la CNTE tras múltiples reuniones. Las protestas resurgen en clave regional (Michoacán, Chiapas, Guerrero) y el gobierno responde des-calificando algunas movilizaciones, llegando a ubicar a la CNTE junto al “bloque conservador”. El contraste es claro: mientras el SNTE ofrece apoyo político abierto a la 4T, la CNTE reafirma la consigna “gobierne quien gobierne, los derechos se defienden” y reivindica su autonomía.

La tercera etapa es el paro nacional de 2024, en plena coyuntura electoral: 28 días de paro (15 de mayo-11 de junio), plantón en el zócalo y acciones en varios estados. El malestar acumulado por salarios, continuidad de la reforma vía USICAMM y falta de respuesta estatal se combina con el relevo de dirigencias en secciones clave (como la 22 de Oaxaca y la 7 de Chiapas), más críticas y combativas. La CNTE formula cuatro demandas centrales: abrogación total de la reforma educativa y sus leyes secundarias, abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 2007, aumento salarial del 100 % y justicia frente a actos represivos. El plantón coincide con actos de la Marea Rosa y el cierre de campaña de Sheinbaum, y la CNTE se mantiene distante de ambos bloques, subrayando su independencia.

A partir de una base de datos de 349 eventos de protesta (2018-junio 2024), el autor muestra que la conflictividad magisterial nunca desaparece, aunque es menor que en el ciclo contra la reforma de 2013. Predominan las protestas por conflictos locales y salariales y se concentra más del 80 % de las acciones en los bastiones de la CNTE (CDMX, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero), mientras en gran parte del país domina el control del SNTE y casi no hay movilización. El paro de 2024 rompe el tope salarial histórico, logra incrementos significativos, reinstalaciones, promesas de reforma al ISSSTE y a la ley de carrera docente, reparación parcial por Nochixtlán y la reinstalación de mesas de negociación.

La conclusión es que la hegemonía progresista de la 4T no logró absorber ni neutralizar por completo a la CNTE. La coordinadora siguió actuando como un actor minoritario pero estratégico, que combina negociación y movilización para arrancar concesiones al Estado, preservando una identidad basada en autonomía política, democracia de base y repertorios de lucha que la diferencian tanto del sindicalismo corporativo tradicional como de los apoyos incondicionales al gobierno en turno.



Protestas universitarias y resistencia: entre la política educativa del sexenio obradorista y las demandas pendientes (Mariana Morales)

La autora estudia las protestas universitarias durante el sexenio de López Obrador y las interpreta como un termómetro de los límites de la hegemonía progresista de la 4T en el campo educativo. Con una lectura gramsciana del Estado ampliado, la autora muestra cómo el obradorismo combinó estabilidad estatal, consenso interclasista y cierta pasivización social, pero sin lograr cerrar del todo la “sutura hegemónica”. Las universidades siguieron siendo un espacio de conflicto donde afloran demandas no resueltas sobre acceso, presupuesto, democracia interna y derechos laborales.

Mariana Morales advierte que en la política hacia la educación superior la 4T introduce cambios normativos importantes (Ley General de Educación Superior, Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, gratuidad a nivel constitucional, Universidades para el Bienestar, becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Elisa Acuña), pero con fuertes continuidades neoliberales: no hay incremento estructural del presupuesto, persisten cuotas y endeudamiento de universidades, no se resuelve la crisis financiera de varias instituciones de educación superior ni la desigualdad

laboral entre figuras académicas, y las nuevas universidades operan con alta precarización docente (contratos simulados, falta de prestaciones). El resultado es un modelo que la autora califica como “transformismo social-liberal”: discurso humanista y comunitario, pero sin tocar los mecanismos de desigualdad ni la lógica de flexibilización laboral.

Empíricamente, el texto registra 367 eventos de protesta universitarios entre 2018 y 2024 concentrados en la zona metropolitana (sobre todo CDMX y Edomex). Los estudiantes protagonizan 156 acciones, articuladas en tres grandes oleadas: 1) La marea feminista contra la violencia de género y el acoso (paros, tomas y colectivas en la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM y múltiples universidades estatales, con consignas como #NiUnaAbejaMenos y #NiUnaBataMenos). 2) Movilizaciones por justicia frente a feminicidios y asesinatos de estudiantes, especialmente en el Bajío y el norte. 3) Protestas por condiciones de estudio, cuotas, seguridad y becas. Estas luchas combinan demandas específicas (protocolos, destitución de autoridades) con cuestionamientos más amplios a la impunidad, la inseguridad y el papel del Estado.

Los trabajadores administrativos y académicos realizan al menos 82 acciones (huelgas, paros, marchas) de-



tonadas por salarios congelados, falta de pago, violaciones a contratos colectivos y precarización generalizada. Destacan las huelgas del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y otros sindicatos universitarios en los primeros años del sexenio, así como el movimiento “UNAM no paga” y las luchas de docentes de las Universidades para el Bienestar por el reconocimiento de su relación laboral. Aunque muchas de estas protestas lograron aumentos o pagos atrasados, no modificaron la política salarial de techo bajo ni la estructura de precariedad.

En las conclusiones, la autora sostiene que, a diferencia de otros ciclos de alta conflictividad (1968, 1999, #YoSoy132, Ayotzinapa), en este sexenio predominan protestas fragmentadas, sectoriales y muchas veces aisladas, en un contexto donde la legitimidad del gobierno lleva a amplios sectores a confiar todavía en que “su” gobierno resolverá. Sin embargo, estas resistencias —feministas, estudiantiles y laborales— muestran que el derecho a la educación superior gratuita y digna sigue siendo una promesa incompleta, que la precarización y la falta de democracia interna continúan, y que

en las universidades se están incubando nodos de conflicto que pueden articularse en futuros ciclos de movilización más amplios.

Mujeres y movimientos encabezados por víctimas

Movimientos de mujeres: entre la institucionalización y la revuelta (Yara Almonte Villaseñor)

El texto de Yara Almonte Villaseñor analiza el nuevo ciclo de movilización de mujeres en México durante el sexenio de López Obrador, tomando como eje la relación contradictoria entre ese movimiento y el gobierno de la 4T. La autora parte de una perspectiva marxista de la acción colectiva, combinada con feminismo socialista, para insistir en que el movimiento de mujeres es interclasista pero que solo se entiende plenamente si se le inscribe en la lucha de clases y en la articulación entre opresión patriarcal y explotación capitalista. Desde ahí entiende “movimiento de mujeres” en un sentido amplio: no solo las movilizaciones abiertamente feministas, sino también aquellas protagonizadas por mujeres en gremios feminizados (salud, cuidados, docencia) y en luchas como las de madres buscadoras o familiares de víctimas.

En la parte de antecedentes, ubica la “primavera violeta” del 24 de abril de



2016 como el punto de inflexión de una cuarta ola feminista en México: por primera vez en décadas, las mujeres salen no solo por demandas sectoriales, sino explícitamente por las demandas de las mujeres. Retoma una genealogía de luchas donde las mujeres ya eran actrices centrales —desde Ciudad Juárez y las madres buscadoras, pasando por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Atenco, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), #YoSoy132, Ayotzinapa o las luchas magisteriales— bajo gobiernos del PRI, PAN y el PRD degradado. En este contexto, las universidades (especialmente la UNAM) se volvieron un foco de protesta contra la violencia machista, con tomas de escuelas, bloqueos y tendaderos, y con la irrupción de bloques negros de encapuchadas que hicieron de la protesta disruptiva, de las pintas y de los destrozos una forma legítima de expresar hartazgo. Este ciclo trajo nuevos protocolos de género, pero también abrió debates sobre punitivismo, “cancelación” y el papel de la policía en clave de “represión con perspectiva de género”.

A partir de una base de datos de acciones contenciosas, la autora muestra la intensidad de la movilización: registra 723 acciones del movimiento de mujeres entre diciembre de 2018 y marzo de 2024, con un pico en 2020 interrumpido parcialmente por la pandemia. Las

marchas masivas del 8M, el 28S y el 25N se vuelven hitos que contribuyen a la idea de que “cada año somos más”. Las demandas se agrupan en cuatro grandes bloques: contra la violencia machista; por derechos sexuales y reproductivos (en particular el aborto legal); por ampliación de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos, y contra la violencia de Estado (despojo, represión, desaparición forzada, feminicidio). La enorme mayoría de las acciones se dirige contra la violencia machista y son de carácter defensivo, mientras que las ofensivas (por ampliación de derechos) son minoría. Con ello, se perfila un movimiento amplio, juvenil, heterogéneo y sobre todo confrontativo, cuya masificación transforma los sentidos comunes sobre la violencia y la desigualdad de género, tanto en la esfera pública como en la vida cotidiana.

En la relación con la 4T, el artículo documenta una tensión permanente: por un lado, AMLO desconfía del movimiento feminista, lo acusa de extremista, de estar infiltrado por la derecha y llega a calificar al feminismo y al ecologismo como “inventos neoliberales”; por otro, la presión del movimiento obliga al gobierno a ajustar discurso y políticas. Al mismo tiempo, la derecha intenta rearticularse aprovechando el descontento feminista, por ejemplo, al capitalizar denuncias contra candidatos de Morena o al im-

pulsar figuras como Alessandra Rojo de la Vega, que se proyectan como “feministas” desde plataformas vinculadas a la oposición. En paralelo, la despenalización del aborto llega principalmente por la vía de la Suprema Corte y no por la iniciativa legislativa del oficialismo, lo que deja espacio a un “feminismo de toga” y a la centralidad del Poder Judicial.

El balance de políticas de la 4T hacia las mujeres combina, según la autora, un feminismo liberal de Estado (paridad de género, presencia sin precedentes de mujeres en secretarías de Estado, cierta ampliación de derechos) con políticas asistencialistas y, al mismo tiempo, una fuerte impronta punitiva (nuevas figuras de delito, endurecimiento de penas, leyes Olimpia, Ingrid, Malena, Agnes, Monse, etcétera). Sin embargo, los indicadores estructurales muestran la persistencia o el agravamiento de la desigualdad: brecha salarial importante, alta precarización e informalidad femenina, sobrerrepresentación de mujeres en trabajos no remunerados y un aumento de los feminicidios respecto al sexenio anterior, en un contexto de militarización y altísima impunidad. Para Almonte, estos límites se explican porque las políticas no alteran la base material de la violencia —pobreza, explotación asalariada, subordinación imperialista— y porque el feminicidio tiene un claro carácter de clase, gol-

peando sobre todo a mujeres pobres, migrantes y trabajadoras de zonas periféricas. En las conclusiones, la autora sostiene que el ciclo 2018-2024 deja un movimiento de mujeres politizado y masivo que impone sentidos comunes feministas a escala social y obliga al Estado a reconfigurarse, generando un tipo de “feminismo de Estado” que coexiste con la revuelta callejera. La tensión entre institucionalización (programas, leyes, cuotas) y revuelta (protesta radical, crítica al punitivismo, cuestionamiento de la 4T y de la derecha) sigue abierta. El movimiento ha logrado avances importantes —sobre todo en el plano simbólico, jurídico y de subjetividad—, pero enfrenta el reto de articular un horizonte emancipador común que no se diluya ni en la cooptación institucional ni en la instrumentalización conservadora.

De la esperanza a la desconfianza: el movimiento liderado por víctimas durante el sexenio obradorista (2018-2024) (Mario Jesús Arellano González y Juan Sebastián Granada-Cardona)

Los autores analizan la trayectoria del movimiento encabezado por víctimas de violencia política y criminal durante el sexenio de López Obrador, mostrando el paso “de la esperanza a la desconfianza”. Parte del contexto heredado: la militarización de la seguridad desde Calderón, la continuidad bajo Peña Nieto (Tlatlaya, Tanhuato,

Ayotzinapa), el aumento de homicidios y desapariciones y la expectativa de cambio que generó AMLO con su discurso de paz, respeto a derechos humanos, justicia transicional y diálogo con víctimas (amnistía, comisiones de la verdad, búsqueda, cooperación con la Organización de las Naciones Unidas [ONU] y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]). Esa promesa abrió un momento de esperanza en que muchos colectivos creyeron posible un viraje real en la política de seguridad y justicia.

Luego sigue tres ejes empíricos. Primero, el caso Ayotzinapa: creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) y el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nuevas órdenes de aprehensión, colaboración con la ONU y detenciones de actores clave alimentan al inicio un clima de confianza, pero a partir de 2021 se acumulan tensiones por la lentitud en los avances; el tercer informe del GIEI revela manipulación de pruebas (la Marina en Cocula) y el ocultamiento de información por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); se cancelan órdenes de aprehensión, renuncia Omar Gómez Trejo a la UEILCA, se niega acceso a archivos militares, se liberan im-

plicados y AMLO sale a defender al Ejército. Las familias concluyen que “nos vieron la cara” y que el gobierno protege a las fuerzas armadas; las protestas se radicalizan (plantones, acciones frente a Campo Militar No. 1, ruptura abierta con el presidente).

Segundo, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Tras la publicación de la Ley General de Desaparición (2018), las familias presionan congresos estatales para armonizarla y participar en su diseño; la pandemia obliga a innovar repertorios (campañas digitales como #CorazonesEnMarcha) y luego se reanudan brigadas de búsqueda en campo. En 2022 el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas presenta un informe durísimo sobre la responsabilidad del Estado y la crisis forense; AMLO responde descalificando al comité, lo que rompe buena parte del capital de confianza. En 2023 renuncia Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda, se nombra una nueva titular cercana a Morena, se denuncian despidos de especialistas, opacidad y fuertes problemas en el nuevo censo de desaparecidos, así como el recorte al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Frente a ello, los colectivos optan por la confrontación abierta (performance de fosas frente a Palacio, campaña #VotaXUnDesaparecidx en 2024).



Tercero, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 [CoVEH]. Aunque nace con gran carga simbólica (Tlatelolco) y cinco instrumentos —Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), Comité de Impulso a la Justicia, Memoria, Plan de Búsqueda y Reparación— pronto muestra límites: mandato acotado, dependencia del Ejecutivo, falta de recursos, renuncias de comisionados y expertas, falta de acceso a archivos militares y de inteligencia, incumplimiento de apoyos a víctimas. Organizaciones de familiares de la Guerra Sucia denuncian un pacto de impunidad entre la Sedena y la Fiscalía General de la República (FGR), critican que se privilegie la memoria simbólica sobre la justicia y cierran el sexenio con fuerte escepticismo.

En el plano analítico, los autores usan la triada de Modonesi (subalternidad, antagonismo, autonomía) para mapear actores. Consideran subalternos a los organismos creados desde el Estado (CoVAJ, UEILCA, CoVEH, MEH, CIJ); pasan de una fase de esperanza a momentos puntuales de choque, pero terminan reabsorbidos y controlados por la lógica gubernamental. Antagónicos son el movimiento por Ayotzinapa, las víctimas de la contrainsurgencia y el Movimiento por Nuestros

Desaparecidos en México; comienzan colaborando, pero ante la falta de verdad y justicia endurecen su discurso, señalan directamente al Estado y radicalizan sus repertorios de lucha. Autónomos son, sobre todo, los colectivos de búsqueda: construyen sus propias prácticas (brigadas, bancos de datos, memoria comunitaria) al margen del Estado, pero oscilan entre autonomía y confrontación abierta cuando son ignorados o saboteados.

En las conclusiones, el autor sostiene cuatro tesis: 1) No hubo en el obradurismo un gran hito aglutinador ni un ciclo unificado de protesta de víctimas como Ayotzinapa en el sexenio anterior; la conflictividad persiste, pero dispersa y sin dirección común. 2) El movimiento de víctimas es altamente heterogéneo en composición social, formas de acción y relación con el Estado. 3) El cambio de tono del Ejecutivo —entre negacionismo, descalificación de organismos internacionales y defensa cerrada del Ejército— y la falta de resultados han ensanchado la distancia entre gobierno y víctimas organizadas. 4) Ante ello, se ha reforzado la internacionalización de las luchas (CIDH, Corte IDH, ONU), que da visibilidad, pero no garantiza cambios internos. El saldo del sexenio, concluyen, es un país más militarizado, un presidente más cercano a las fuerzas armadas que a las víctimas y un nuevo ciclo de desconfianza, que deja a



la próxima administración la tarea de romper el pacto de silencio con las élites castrenses, fortalecer comisiones y mecanismos de búsqueda y, por fin, avanzar en verdad, justicia y memoria.

Movimientos indígenas

El movimiento indígena en el sexenio obradorista. Luchas por la autonomía, defensa del territorio y la vida (César Enrique Pineda y Gustavo M. de Oliveira)

El capítulo sostiene que, aunque el movimiento indígena parezca menos visible en la escena nacional durante el sexenio de López Obrador, en realidad ha vivido un ciclo muy intenso de resistencia y autoorganización. Los autores lo leen en dos claves entrelazadas: la lucha por la autonomía y la defensa del territorio/la vida frente al despojo, la violencia estatal y criminal y los megaproyectos. Retoman la larga trayectoria que va del impulso “ofensivo” de los años noventa (EZLN, luchas antineoliberales, batallas por el reconocimiento constitucional) a una fase defensiva marcada por el extractivismo, la agroindustria, la guerra contra el narco y la expansión del capital criminal en territorios indígenas, que obligó a replegar la ofensiva política hacia la defensa comunitaria de la tierra y los bienes comunes.

En el plano teórico distinguen tres tipos de autonomía frente al Estado:

- “Más allá del Estado”, como el zapatismo, que busca construir formas de vida y gobierno propias sin reconocimiento estatal, articuladas al Congreso Nacional Indígena (CNI).
- “A pesar del Estado”, propia de redes como la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), que desconfían de las instituciones, pero exigen derechos, recursos y reformas sin integrarse a la lógica partidista.
- “Con el Estado”, donde municipios como Cherán o Ayutla disputan reglas desde dentro (presupuesto directo, sistemas normativos, reformas estatales) sin renunciar a su identidad comunitaria.

La 4T, dicen, privilegió los programas sociales por encima de una reforma profunda de los derechos indígenas. Hubo consultas y una propuesta de reforma constitucional que buscaba reconocer a los pueblos como sujetos de derecho público, fortalecer el derecho al territorio y al consentimiento libre, previo e informado, pero la iniciativa se congeló, se recortó en el paquete de reformas de 2024 y finalmente no prosperó. Esto detonó la articulación de ALDEA y una oleada de movilizaciones en defensa de la libre determinación y contra el trato “folclorizante” que reduce la agenda indígena a programas y ceremonias, pero evita tocar los intereses económicos de fondo.



En el registro de la protesta, documentan 130 movilizaciones indígenas entre 2018 y 2023 (sin contar las estrictamente ambientales). La mayoría se sitúa en Chiapas y Guerrero, y va desde bloqueos de carreteras y toma de oficinas hasta la retención de funcionarios y grandes marchas. Una parte son demandas “básicas” (servicios, caminos, condonación de deudas con la Comisión Federal de Electricidad [CFE], pero otra es abiertamente política: seguridad comunitaria, denuncia de desapariciones y desplazamientos forzados, exigencia de justicia frente a masacres y asesinatos. Destaca el ciclo de hostigamiento al Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (desapariciones, asesinatos de integrantes), los ataques a Santa María Ostula, en Michoacán, y al Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, en Oaxaca, así como la criminalización de procesos autonómicos y de defensores ambientales.

El texto subraya también la ofensiva contra el zapatismo y sus redes: prisión de indígenas adherentes a la Sexta (visibilizada por huelgas de hambre en 2019), ataques de grupos como la Organización Regional de Cafecultores de Ocosingo en Chiapas y campañas de solidaridad en México y en el extranjero. Todo esto ocurre en un contexto de militarización y penetración del crimen organizado en regiones indígenas, donde la frontera entre

violencia estatal, paraestatal y criminal es cada vez más difusa.

La segunda parte se centra en el movimiento *campesindio* en defensa del territorio. A pesar del cambio discursivo del obradorismo (crítica al neoliberalismo, promesa de no más despojos, algunos planes de justicia para pueblos específicos y la cancelación de proyectos como La Parota o Paso de la Reina), el régimen de acumulación no se altera de fondo: continúan la minería, los megaproyectos de infraestructura (Tren Maya, Corredor Interoceánico), el acaparamiento del agua y la expansión agroindustrial.

Los autores destacan la ambivalencia de la política territorial de la 4T: por un lado, se presentan iniciativas ambientales progresistas, por ejemplo, una reforma minera que intenta revertir cambios salinistas de 1992 que daban prioridad absoluta a la minería sobre derechos ejidales y comunitarios; por otro, se impulsa un megaproyecto como el Tren Maya, que abre el sureste al turismo transnacional y al capital inmobiliario, con efectos de deforestación, cambio de uso de suelo y descampesinización muy similares a los criticados en Cancún, Tulum o Playa del Carmen. Lo mismo ocurre con el Corredor Interoceánico, que reconfigura el istmo de Tehuantepec hacia economías industriales subordinadas a la geopolítica estadounidense.

En este terreno, las comunidades enfrentan consultas manipuladas, división interna y criminalización de la protesta, además de largos litigios y un desgaste organizativo profundo. Muchos procesos de resistencia dependen del acompañamiento de organizaciones de derechos humanos y colectivos ambientalistas, al tiempo que el presidente descalifica reiteradamente a estas organizaciones, lo que los autores consideran un despropósito frente al papel que han jugado en la defensa de los pueblos.

En el cierre, el capítulo plantea que el sexenio obradorista no fue un periodo de mayor esperanza para los pueblos indígenas, pese a algunos avances: planes de justicia, ciertos cambios constitucionales a nivel estatal, experiencias consolidadas de autonomía “con el Estado”, ampliación de recursos para algunos programas. Todo eso queda opacado por la continuidad del despojo (megaproyectos, minería, agua), la violencia del narcotráfico y la militarización del país. El movimiento indígena se mantiene vivo, reagrupado en espacios como el CNI y ALDEA, pero muy disperso en lo territorial y estratégico, obligado a pelear simultáneamente por autonomía, territorio y vida. El gran desafío, concluyen, es reactivar la solidaridad social más allá de los territorios directamente afectados y romper la “reflejodependencia” respecto al Estado, para que las luchas

indígenas no sigan subordinadas, instrumentalizadas o reducidas a la lógica de los programas sociales.

Autonomías indígenas en el sexenio obradorista: Cherán y el zapatismo, entre la autodeterminación y el transformismo (Edgars Martínez Navarrete y Andrea Cesaroni)

El capítulo analiza cómo dos proyectos de autonomía indígena —el zapatismo en Chiapas y el municipio autónomo de Cherán en Michoacán— se han relacionado con el Estado y, en particular, con el gobierno de la 4T, entendida como un progresismo tardío que combina algunos cambios con una fuerte recomposición conservadora. La pregunta central es qué tipos de conexión se han construido entre estas autonomías y el obradorismo, si ha habido una apertura real o, más bien, mecanismos de transformismo (en sentido gramsciano) que intentan absorber, neutralizar o reacomodar a sujetos antes antagonistas.

Primero se define la autonomía indígena como proyecto político de libre determinación: comunidades que crean estructuras propias de autoridad, gestión del territorio, gobierno y reproducción de la vida, en tensión constante con un entorno estatal, capitalista y muchas veces violento. Se subraya que las autonomías no son bloques fijos, sino procesos que cam-



bian en el tiempo según coyunturas, correlaciones de fuerza y tradiciones organizativas. De ahí que no baste con etiquetar “autonomía con el Estado” versus “autonomía contra el Estado”, hay gradientes y variaciones históricas. El texto retoma la tipología de conexiones de Bringel y Falero: subordinada, negociada, discontinuada y de desconexión, que pueden combinarse y mutar.

Sobre el obradorismo, los autores lo sitúan como progresismo tardío, ya que no surge de grandes ciclos de movilización, sino de un pacto electoral, y para gobernar despliega mecanismos de transformismo (molecular, compuesto e ideológico) que incorporan a antiguos opositores o críticos —intelectuales, liderazgos indígenas, organizaciones— al proyecto de la 4T. Esto se articula con dos pilares: el superliderazgo mediático de AMLO (mañaneras, construcción de sentido común) y la militarización creciente (Guardia Nacional, Ejército, Marina) puesta al servicio del nuevo ordenamiento territorial y de los megaproyectos. De ahí la noción de “neodesarrollismo verde olivo”: desarrollo estatal y extractivista apuntalado por fuerzas armadas.

En la agenda indígena esto se ve en tres frentes. 1) Extractivismo y megaproyectos: el Tren Maya, el Corredor Interoceánico o la agroindustria

aguacatera en Michoacán se revisten de retórica indígena y “bienestar” mientras reorganizan territorios para la acumulación de capital con consultas cuestionadas, militarización y criminalización de quienes se oponen. El gobierno se apropia de símbolos y consignas (bastón de mando, mandar obedeciendo) para legitimar su modelo, mientras acusa de “conservadores” a activistas y pueblos críticos. 2) Reformas e instituciones: se crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con Adolfo Regino, se realizan foros y consultas sobre una reforma constitucional indígena y se anuncian planes de justicia (como para el pueblo yaqui), pero la iniciativa enviada en 2024 recorta fuertemente las demandas históricas de San Andrés y mantiene intocado el núcleo duro de la propiedad y el control estatal del territorio. 3) Programas sociales, en particular, Sembrando Vida, que reorganiza el campo sobre la base de parcelas individuales y padrones, generando nuevos espacios de decisión ligados al Estado y desplazando a organizaciones campesinas previas.

Desde el zapatismo, la respuesta ha sido de rechazo abierto: los megaproyectos se leen como una nueva ofensiva neoliberal que destruye territorios y modos de vida; la Guardia Nacional, como un ejército más que amenaza a los pueblos, y Sembrando Vida, como reforma agraria invertida que rom-



pe tejidos comunitarios al empujar la regularización y fragmentación de tierras. De ahí su insistencia en mantenerse desconectados de la política institucional, en denunciar el transformismo “indigenista” de la 4T y en profundizar su propio proyecto: la reciente reestructuración interna (desaparición de municipios autónomos y juntas de buen gobierno, apuesta por la tierra común sin propiedad) se plantea explícitamente como alternativa al orden territorial obradorista.

Cherán, en cambio, encarna una autonomía reconocida que se mueve en un péndulo entre conexión negociada y conexión discontinuada. Aprovecha ventanas de oportunidad legales para ampliar sus márgenes (reconocimiento de autogobierno y presupuesto directo, seguridad comunitaria, influencia en reformas estatales), manteniendo a la vez una fuerte mediación de las asambleas barriales y recelando de la partidocracia. Sin embargo, también enfrenta tensiones: la expansión aguacatera y la violencia asociada, la entrada poco transparente de Sembrando Vida y gestos simbólicos como la visita del gobernador al nuevo mercado municipal muestran hasta qué punto el transformismo busca normalizar la autonomía dentro del entramado estatal y del modelo agroexportador.

En las conclusiones, los autores sostienen que la 4T no inaugura un nuevo

paradigma de relación entre Estado y autonomías indígenas, sino una sofisticación del transformismo: absorbe sectores, readecúa instituciones, combina cooptación y militarización y usa la agenda indígena para legitimar un proyecto desarrollista. Frente a ello, Cherán explora un equilibrio inestable entre negociar y marcar límites, mientras el zapatismo reafirma la desconexión y redobla su horizonte de autonomía radical. El balance del sexenio, visto desde estas dos experiencias, es una agenda indígena parcialmente atendida en el discurso y en ciertos derechos, pero subordinada al extractivismo y a la reconfiguración conservadora del progresismo tardío.

Antagonismo, movilización social y megaproyectos de infraestructura. El Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos en el sexenio obradorista (Bianca Bachelot y Sergio Barranco González)

El capítulo analiza cómo el obradorismo ha hecho de los megaproyectos de infraestructura —en particular el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos— el corazón de su programa económico, articulando un dispositivo de poder basado en tres ejes: el discurso presidencial (las mañaneras), las consultas ciudadanas e indígenas como mecanismo de legitimación y la presencia de las fuerzas armadas como garante y beneficiaria de las obras. Aunque el



gobierno se presenta como ruptura con el neoliberalismo y defensor de la soberanía energética, los autores sostienen que, en la práctica, estos proyectos reordenan el territorio en clave neoliberal y geopolítica, profundizando la subordinación a capitales privados —en especial estadounidenses— y generando fuertes conflictos socioambientales.

En el caso del Tren Maya, se describe un proyecto de 1 500 km de vías para pasajeros y, sobre todo, para carga (se estima que 70 % de los ingresos proveniría del transporte de mercancías). El Tren Maya se articula con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y con una red de Polos de Desarrollo para el Bienestar, gasoductos y centrales eléctricas que convierten al sur-sureste en plataforma manufacturera y energética al servicio del nearshoring y de la exportación de gas estadounidense. Un elemento clave es el gasoducto submarino Puerta al Sureste, impulsado por CFE y TC Energy, que alimentará parques industriales, plantas de ciclo combinado y futuras terminales de licuefacción para reexportar gas a Europa y otros mercados, consolidando un patrón extractivista y de subordinación geopolítica que se disfraza de desarrollo regional y reordenamiento sustentable.

El Proyecto Integral Morelos, por su parte, se presenta como pieza del res-

cate de la CFE: integra dos termoeléctricas de ciclo combinado en Huexca (Morelos), un gasoducto de 170 km, un acueducto desde la planta de tratamiento de Cuautla y líneas de transmisión, todo en la zona de influencia del Popocatepetl. Oficialmente se legitima como proyecto para garantizar soberanía energética, abaratar tarifas y evitar que las plantas sean un elefante blanco, pero en los hechos se inserta en la misma red nacional de gasoductos que transportan gas de fracking importado de Estados Unidos para abastecer industrias altamente consumidoras de energía y corredores fabriles ligados al comercio internacional.

El capítulo reconstruye la conflictividad socioambiental alrededor del Tren Maya en dos grandes etapas. En la fase civil, Fonatur, INPI y Bienestar desplegaron una intensa presencia territorial antes y durante la consulta indígena y ciudadana de 2019, difundiendo solo los supuestos beneficios del proyecto, apoyados en figuras como los enlaces territoriales y en programas como Sembrando Vida, que reforzaban la idea de que el tren traería bienestar y empleos. Organizaciones como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) y otros colectivos mayas difundieron información crítica, vincularon el Tren Maya con proyectos previos como el Plan Puebla-Panamá y defendieron nociones de buen vivir frente

al discurso oficial de “desarrollo”. La consulta fue duramente cuestionada por no cumplir con los estándares de consulta previa, libre e informada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y por realizarse sin contar con manifestaciones de impacto ambiental sólidas.

Tras esa etapa vinieron los amparos —el CRIPX obtuvo una suspensión definitiva para Xpujil—, que nunca se respetaron. El gobierno llegó a exhibir públicamente a quienes promovieron el amparo, alimentando el hostigamiento en las comunidades y consolidando una narrativa donde los opositores al tren son “enemigos del desarrollo”, “conservadores” o “falsos ambientalistas”. Organizaciones ambientales y de derechos humanos señaladas en la mañana denunciaron el riesgo que implica ese estigma en un país con altísimos índices de violencia contra defensores del territorio, mientras el CRIPX sufrió robos selectivos de equipos e información y un clima creciente de amenazas.

La fase militar se abre cuando el gobierno declara al Tren Maya, al Corredor Interoceánico y a varias infraestructuras asociadas como proyectos de seguridad nacional y utilidad pública, transfiriendo la construcción, operación y administración a la Sedena, a través del conglomerado empresarial militar Grupo Aeroportuario, Ferro-

viario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, y desplegando miles de efectivos de la Guardia Nacional a lo largo de la ruta. Con ese marco, el Ejecutivo elude suspensiones judiciales y acelera obras como la estación, paraderos, hotel y casino en Calakmul, incluso dentro o muy cerca de la reserva de la biosfera reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sin notificación adecuada. En la vida cotidiana esto se traduce en accidentes laborales, abusos de soldados contra pobladores —incluido el asesinato de un comunero en el ejido Constitución y la muerte de un menor en un accidente de volquete ligado a las obras— y en una creciente impunidad, al tiempo que los militares comienzan a sustituir a las autoridades civiles como mediadores en conflictos locales.

La respuesta social se articula en redes cada vez más amplias: el Tribunal de la Naturaleza documenta en 2023 los daños del TM y lo califica de proyecto ecocida y etnocida; la caravana El Sur Resiste, organizada con el Congreso Nacional Indígena, recorre territorios afectados por el Tren Maya y el Corredor Interoceánico y denuncia estos megaproyectos como nueva fase de guerra de colonización; en su paso por Xpujil, la caravana confronta directamente a la Sedena exhibiendo la violación de la suspensión judicial. Todo ello muestra cómo las luchas locales



se conectan con marcos de denuncia global sobre extractivismo, militarización y clima.

En el caso del Proyecto Integral Morelos, el capítulo narra la trayectoria de resistencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala y de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, que desde 2012-2014 denuncian los riesgos del gasoducto en zona volcánica, el despojo de agua del río Cuautla y los impactos para comunidades campesinas. Frente a la promesa de campaña de cancelarlo, AMLO opta en 2019 por reactivarlo mediante una consulta ciudadana, ofreciendo como compensación reducción de tarifas eléctricas y obras sociales. Las organizaciones rechazan esa consulta, piden la cancelación total del megaproyecto y se apoyan en dictámenes técnicos de riesgo volcánico y ambiental elaborados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Instituto de Geofísica de la UNAM. El conflicto se agrava con la criminalización del movimiento y el asesinato de Samir Flores, uno de sus principales voceros e integrante del CNI, lo que rompe de manera profunda la interlocución entre el gobierno federal y amplios sectores del movimiento indígena y campesino.

En síntesis, el capítulo concluye que tanto el Tren Maya como el Proyecto Integral Morelos revelan un patrón: bajo la retórica de la justicia social y la recuperación del Estado, la 4T impulsa un reordenamiento territorial neoextractivista, fuertemente militarizado, que choca frontalmente con los derechos colectivos, el ambiente y los modos de vida campesinos e indígenas. Los antagonismos que se despliegan no son solo oposiciones locales, sino luchas que combinan defensa del territorio, de la vida y de la autonomía frente a un modelo de desarrollo que, pese al cambio discursivo, mantiene la lógica de la acumulación capitalista y la subordinación geopolítica.

Participación política a la derecha y a la izquierda

De las calles a la movilización electoral: la participación política en el obradorismo (Daniel Arturo Sánchez Díaz)

El capítulo estudia cómo funciona la participación política dentro del obradorismo durante el sexenio de López Obrador, distinguiendo entre liderazgo de AMLO, Morena como partido, el obradorismo como red de actores que buscan capital político y la 4T como multitud menos organizada que apoya al proyecto. El autor sostiene que, desde la institucionalidad, no hubo intención real de fortalecer la organización

de base: el partido se volvió principalmente un mecanismo para convertir capital político en cargos y para canalizar movilización electoral y de apoyo al gobierno, mientras las bases fueron relegadas de las decisiones estratégicas.

Define el obradorismo como una estructura intermedia: redes de grupos, organizaciones y liderazgos locales (históricos y “arribistas”) que trabajan en territorio, hacen brigadeo, círculos de estudio, jornadas de abasto, etcétera, buscando acumular capital político. Morena es la expresión institucional de ese fenómeno y funciona como mecanismo central de contención y movilización controlada: organiza procesos internos, elecciones, consultas y grandes concentraciones (AMLOFest, marchas por el INE, por la soberanía energética, etcétera), pero con reglas verticales donde las cúpulas —incluido AMLO— imponen perfiles y decisiones por encima de estatutos y asambleas. La 4T, en sentido más amplio, se refiere a los sectores populares que se movilizan masivamente sin pertenencia orgánica, muchas veces porque ven al proyecto como “la opción menos peor” frente a la élite tradicional.

El texto reconstruye cuatro etapas: 1) 2018-2019, apoyo entusiasta a las primeras medidas de gobierno (Nuevo Aeropuerto Internacional de México, huachicol, Guardia Nacional) y crea-

ción de comités y del Instituto Nacional de Formación Política. 2) La crisis por la renovación de la dirigencia de Morena, donde se acentúan tensiones entre bases y cúpulas, históricos y “arribistas”, y se empieza a usar el INFP tanto para defender al líder como para criticar prácticas internas. 3) La fase de polarización frente al bloque opositor (Marea Rosa, #YoDefiendoAINE), con consultas como la revocación de mandato, que, aunque no son vinculantes, sirven para legitimar al gobierno y probar capacidad de movilización. 4) La etapa rumbo a 2024, con estructuras como Avanzada Nacional y SUMA y la aparición de espacios como la Convención Nacional Morenista.

El trabajo subraya dos mecanismos de subalternización: la exclusión de las bases de la toma de decisiones (elección de dirigencias y candidaturas vía encuestas o designaciones cupulares) y la construcción de estructuras que dependen directamente de AMLO, como los Servidores de la Nación y los enlaces territoriales, que controlan padrón de beneficiarios y operación electoral. Ante ello, surgen espacios de resistencia y crítica interna (Foro Nacional de Militantes, Unidad de las Izquierdas, Convención Nacional Morenista), que denuncian prácticas autoritarias, clientelares y “derechización” del partido, pero con capacidad limitada para modificar la línea.

En conclusión, la participación política en el obradorismo se ha desplazado de las calles a la movilización electoral: desde la experiencia de movimiento que construyó Morena hacia una participación principalmente instrumentalizada para llenar plazas y mover votos. Las bases, sin canales efectivos de incidencia, se repliegan a construir redes locales propias —a veces combinando trabajo comunitario y clientelismo— con la esperanza de, a futuro, convertir ese capital territorial en posiciones dentro del partido o en cargos de elección, mientras el partido mantiene una arquitectura que asegura el control cupular sobre el rumbo de la 4T

¿Más allá del obradorismo? El Instituto Nacional de Formación Política y la participación en Morena (Berenice Ortega Bayona)

El texto usa el caso del Instituto Nacional de Formación Política para mirar por dentro a Morena como partido-movimiento y preguntarse si es posible ir más allá del obradorismo; es decir, construir una militancia crítica y organizada que no dependa solo del liderazgo de AMLO. La autora trabaja con entrevistas a militantes de los estados de México, Morelos, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca y la alcaldía Azcapotzalco) y con los propios documentos del partido, para ver cómo se vive hoy la participación política y la formación dentro de Morena.

Parte de la idea de que Morena nace como escisión del PRD y se define en sus estatutos como algo híbrido: partido electoral y, a la vez, movimiento popular antineoliberal, con comités de base, comités de organización territorial (COT), círculos de estudio y una prohibición formal de corrientes internas. El obradorismo es el sello que articula todo eso: una identidad de izquierda, progresista, centrada en la figura de López Obrador y en la narrativa de la Cuarta Transformación. Pero cuando el partido conquista el poder en 2018 (y lo ratifica en 2024), la lógica de partido en el gobierno empieza a chocar con la lógica de movimiento de base: muchos cuadros pasan a ser funcionarios o servidores de la nación, se vacían los espacios orgánicos y se refuerza el control de las cúpulas y las prácticas clientelares/corporativas ya conocidas.

En ese escenario aparece el INFP como apuesta para ordenar y centralizar la formación política. Los estatutos le dan un peso enorme: la formación ética y política es obligatoria para militantes y simpatizantes, sobre todo para quienes buscan candidaturas o cargos internos; participar en sus talleres es el mecanismo de admisión al partido, requisito para competir por cargos y parte de los derechos y obligaciones básicos de militancia. El INFP coordina cursos, talleres, materiales impresos y digitales, investiga-



ción, divulgación, presencia en medios, acompañamiento a comités y COT; administra una plataforma en línea y se piensa explícitamente como el “intelectual orgánico” de Morena y de la 4T, con un Plan Nacional de Formación que define contenidos y líneas ideológicas.

La autora muestra que, en el discurso, la formación se concibe de forma amplia: no solo capacitar para cumplir un trámite, sino politizar, generar debate ético, ideológico y organizativo, abrir actividades a la población abierta —especialmente a quienes quedaron fuera del sistema educativo— y ayudar a defender derechos y patrimonio nacional. En teoría, el INFP debería ser una palanca para democratizar al partido desde abajo, articulando círculos de estudio, talleres y redes de militantes críticos.

Pero las entrevistas revelan las tensiones. Por un lado, militantes ligados al INFP ven ahí un espacio para resistir la normalización de Morena como simple maquinaria electoral; a través de la formación, intentan discutir prácticas caudillistas, criticar el uso excesivo de encuestas, defender los estatutos, recuperar una identidad de izquierda y construir organización territorial que no se reduzca a acarreo. Por otro lado, esa misma infraestructura puede ser usada desde arriba como un brazo más de movilización

electoral: cursos diseñados para legitimar decisiones ya tomadas, énfasis en la lealtad al líder, presión para dedicar tiempos de formación a tareas de campaña, etc. La frontera entre formación crítica y “alineamiento” nunca está del todo clara.

El capítulo subraya que el control institucional del INFP —su centralización y su dependencia de la dirigencia— le da fuerza, pero también lo vuelve vulnerable al transformismo interno: puede ser una escuela de cuadros críticos o un filtro ideológico al servicio de las cúpulas, según cómo se use. Aun así, la autora resalta un efecto innegable: se ha ampliado la politización popular. En barrios y colonias donde antes casi no se hablaba de política, hoy hay más discusión sobre programas sociales, modelos de país, corrupción, derecha/izquierda, etcétera, no siempre con la profundidad que se desearía, pero sí rompiendo el silencio y el miedo heredados de la cultura política posrevolucionaria.

En las conclusiones, Ortega abre preguntas fuertes: ¿puede el INFP sostener una formación lo bastante autónoma y crítica como para sobrevivir a la retirada de AMLO? ¿Aprenderá Morena de otras experiencias de partidos-movimiento antineoliberales en América Latina que se desgastaron en el poder? ¿Cómo evitar que el éxito electoral y la comodidad en el gobier-

no lleven a una inercia de desmovilización y a la reproducción de los mismos vicios de la vieja cultura política?

El balance que propone es ambivalente: Morena reproduce muchos rasgos clientelares y oligárquicos y la formación política aún no es hegemónica dentro del partido, pero, al mismo tiempo, el INFP ha abierto grietas para que más gente se politice, discuta y se organice. Si eso alcanzará para construir algo más allá del obradorismo —un partido-movimiento de izquierda que no dependa solo del carisma de un líder— sigue siendo, por ahora, una batalla en curso.

Las organizaciones sociales frente al proceso electoral del 2024 y las candidaturas de Morena (Joel Ortega Erreguerena y Massimo Modonesi)

El capítulo se propone mapear cómo llegaron las organizaciones sociales al ciclo electoral de 2024 y qué tipo de relación establecieron con el obradorismo, usando la triada de Modonesi: subalternidad, antagonismo y autonomía. La idea de fondo es fuerte: más que solo ganar otra vez en las urnas, el obradorismo logró consolidar un bloque hegemónico amplio, capaz de atraer a la mayor parte de las organizaciones obreras, campesinas, urbanas y populares, incluidas varias que durante años se reivindicaron independientes del Estado. Frente a ese

polo hegemónico, lo que queda del lado autónomo y antagónico son pocos actores, muy fragmentados y en desventaja.

Los autores reconstruyen primero el lado subalterno/adhesivo, donde identifican tres grandes grupos de organizaciones que se alinean con Morena y con la candidatura de Claudia Sheinbaum:

1. Las obradoristas de siempre: centrales campesinas como la CCC, UNORCA, El Barzón; organizaciones del movimiento urbano popular (UPREZ, FPFV-SXXI, Asamblea de Barrios, CONUR); sindicatos como el de mineros o la CATEM, que ya habían acompañado a López Obrador en 2006, 2012 y 2018, y ahora ratifican la alianza con la 4T.
2. Las corporativas priistas en reconversión: sectores de la CTM y la CROC, la Federación de Sindicatos al Servicios del Estado, sindicatos nacionales estratégicos como el petrolero, el del Instituto Mexicano del Seguro Social o el de trabajadores de la Secretaría de Salud y, sobre todo, el SNTE, que se presenta como “ejército intelectual” del nuevo régimen tras décadas de ser pieza clave del PRI.

3. Las antes independientes: el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la UNT, la Nueva Central de Trabajadores, franjas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, redes del movimiento urbano popular que antes se vinculaban a la izquierda independiente, que ahora optan por sumarse, algunos con entusiasmo, otros con el argumento de que se trata de una decisión táctica para frenar a la derecha sin renunciar, al menos en el discurso, a su autonomía histórica.

En contraste, el texto identifica un conjunto mucho más reducido de actores autónomos o abiertamente antagónicos. Ahí destacan la CNTE, que en su VI Congreso Extraordinario califica el proceso electoral como una “farsa” y lanza un paro nacional con plantón en el zócalo justo en plena campaña, y los familiares de los 43 de Ayotzinapa, que rompen con el gobierno tras la defensa presidencial del Ejército y la falta de verdad y justicia, manteniendo una línea claramente crítica frente al Estado. Se suman experiencias como la de Susana Prieto y el sindicalismo maquilador, que rompen con Morena ante el bloqueo a la reforma de las 40 horas, y los colectivos de víctimas de desaparición, que promueven acciones como “Vota por las personas desaparecidas” para convertir el voto nulo en gesto político, en lugar de ali-

nearse con alguna candidatura. En la franja de la izquierda radical, el EZLN decide no repetir una apuesta tipo Marichuy 2018 y aparecen iniciativas menores (Partido Comunista de México, Bloque Independiente Anticapitalista y Antipatriarcal) que llaman a construir una opción propia, pero con impacto muy acotado.

Un eje importante del capítulo es mostrar cómo operó la campaña de Sheinbaum hacia las organizaciones: encuentros sectoriales, foros con campesinos, sindicatos y movimientos urbanos, construcción de “frentes” y “capítulos” obradoristas en casi todos los sectores (cultura, feminismos institucionales, jóvenes, científicos, etcétera). Ahí se ve el trabajo fino de articulación hegemónica: se reconocen demandas históricas, se ofrecen espacios en consejos, programas o futuras reformas, se apela al miedo al regreso del PRIAN y se presenta la continuidad de la 4T como única salida realista. Muchas organizaciones asumen esa narrativa y la reproducen hacia sus bases, reforzando una subalternidad consentida: se mantienen identidades de lucha, pero atadas al proyecto gubernamental.

Las conclusiones son bastante críticas. Por un lado, señalan que el bloque obradorista absorbió y reacomodó a casi todas las viejas estructuras corporativas y una parte relevante de



las organizaciones que antes eran independientes, sin que al calor de la 4T hayan surgido nuevos sujetos organizados fuertes (salvo espacios más bien sectoriales o ligados al propio aparato estatal). La intermediación social sigue pasando, en gran medida, por mecanismos clientelares, cupulares y corporativos, solo que ahora bajo el paraguas de Morena. Por otro lado, quienes intentaron mantenerse autónomos o antagonistas (CNTE, Ayotzinapa, víctimas, pequeños núcleos socialistas) operan en un entorno político poco favorable: con menos eco mediático, acusados desde el discurso oficial de “conservadores” o “funcionales a la derecha”, y sin capacidad de articular un polo común.

El saldo que plantean Ortega y Modonesi es ambivalente pero claro: la disminución de la conflictividad social durante el sexenio no significa que hayan desaparecido los agravios, sino que buena parte de las organizaciones optó por canalizar sus apuestas a través del obradorismo y de la vía electoral, replegando la confrontación callejera. La gran pregunta que dejan abierta es si esta hegemonía organizacional se mantendrá estable en el nuevo gobierno o si, ante los límites y contradicciones de la 4T ya sin AMLO en la presidencia, empezarán a reactivarse procesos de autonomía y antagonismo que rompan con esa lógica de alineamiento casi generalizado.

El triunfo de Claudia Sheinbaum y la derrota del movimiento de oposición de derecha. Una etnografía situacional (Guadalupe Olivier, Sergio Tamayo, Israel Flores)

El capítulo analiza, desde una etnografía situacional, por qué el 2 de junio se tradujo en el triunfo contundente de Claudia Sheinbaum y en la derrota del movimiento de oposición de derecha articulado alrededor de la Marea Rosa y Claudio X. González. Para hacerlo, compara minuciosamente dos momentos en el mismo escenario: el mitin de la Marea Rosa con Xóchitl Gálvez del 19 de mayo y el cierre de campaña de Sheinbaum del 29 de mayo, ambos en el zócalo. A partir de la observación directa, del registro de consignas, mantas, organización del espacio y de una etnografía digital, los autores reconstruyen las culturas políticas enfrentadas y muestran cómo se materializa la lucha por la hegemonía en la plaza pública.

En el acto de la Marea Rosa, el zócalo se puebla mayoritariamente de clases medias y altas, con estética whitexican, ropa de marca y fuerte sentido de distinción de clase. Es una movilización que se presenta como “ciudadana” y “apartidista”, pero en los hechos funciona como cierre de campaña de la coalición PAN-PRI-PRD. Claudio X. González opera como verdadero director de escena, coordinando tiem-



pos y mensajes desde atrás del templete; arriba hablan Analú Medina, Guadalupe Acosta Naranjo, Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez. El discurso dominante es el de la defensa de la democracia, la República y la propiedad privada, acompañado de carteles que equiparan a Morena con narcopolítica y dictadura. El público se convence a sí mismo de ser mayoría (“somos un millón, vamos a ganar”) y confunde la emotividad del mitin con fuerza electoral real. La presencia del plantón de la CNTE —a la que Claudio X llegó a calificar de “delincuencia organizada”— genera tensiones, roces y descalificaciones (“son porros”), evidenciando un antagonismo de clase y una mirada criminalizante hacia el magisterio disidente.

El cierre de Sheinbaum presenta una escena distinta: un zócalo colmado sobre todo por clases populares y sectores sindicales y territoriales, atravesado también por el plantón de la CNTE, que ocupa aproximadamente una cuarta parte de la plancha. El templete se acomoda de espaldas a Palacio Nacional, subrayando la continuidad simbólica con López Obrador. El espacio se llena de grandes banderas y mantas de sindicatos y organizaciones (CATEM, SME, petroleros, movimientos urbanos populares, contingentes de Oaxaca, Nayarit, Edomex, colectivos LGBTTIQ+, etcétera), que disputan lugares de

visibilidad en una verdadera batalla por el espacio. El discurso de Sheinbaum se presenta casi como el de una jefa de Estado en ciernes: reivindica la economía moral y el liderazgo de AMLO, declara superado el modelo neoliberal y plantea un proyecto de Estado activo, libre comercio regulado y bienestar social, aunque con un tono moderado que busca no romper con las élites económicas.

Los autores contrastan también las biografías políticas de Xóchitl y Claudia como parte de la disputa simbólica. Mientras Gálvez se apoya en la narrativa meritocrática de “hacerse a sí misma” y se dirige sistemáticamente a las clases medias con un discurso típico del panismo neoliberal, Sheinbaum aparece anclada en una trayectoria larga de izquierda: familia marcada por el 68, militancia en el Consejo Estudiantil Universitario, paso por el PRD y luego por el obradorismo. Esa biografía, sumada a la de Clara Brugada, refuerza la imagen de un liderazgo femenino surgido de movimientos sociales, aunque hoy administren un proyecto de izquierda moderada. En el cierre, además, se observa la articulación entre el partido y plataformas como SUMA, que agrupan a sindicatos del gobierno capitalino, organizaciones urbanas y colectivos diversos, reforzando la idea de un bloque popular-organizativo detrás de la 4T.



En el epílogo, el texto conecta las escenas del zócalo con los resultados electorales: Sheinbaum gana con casi 60% de la votación, Morena y aliados controlan la mayoría calificada en el Congreso y 24 de 32 gubernaturas, mientras que el PAN, PRI y PRD obtienen sus peores números, e incluso el PRD pierde el registro. El “ciclo de protesta” de la oposición de derecha queda así clausurado con una derrota política y moral. Sin embargo, advierten que la derecha no desaparece: mantiene ventajas estructurales por su fusión con élites económicas e Iglesia, y seguramente intentará rearticularse quizá en nuevos vehículos partidarios.

Del lado de la 4T, la enorme legitimidad de Sheinbaum —mayor incluso que la de AMLO en 2018, por votos y control territorial— le da margen para impulsar su agenda, pero también la obliga a gestionar tensiones internas en Morena y su relación con movimientos críticos (Ayotzinapa, feminismos, ambientalismo, magisterio). El capítulo cierra sugiriendo que se abre un nuevo ciclo de confrontación política donde la pregunta central será cómo se reconfiguran, en la calle y en las urnas, la izquierda gobernante y la oposición de derecha tras la elección de 2024.



CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO



INESLE
INSTITUTO
DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS

COMENTARIOS PERSONALES

Luchas sociales y participación política en el sexenio obradorista es un libro que se agradece por su ambición analítica y su sentido de oportunidad. Reúne voces diversas que logran capturar un panorama muy amplio de la movilización social durante los años de la 4T, y lo hacen con un rigor documental notable, sobre todo gracias a la base de datos sistemática que sustenta gran parte del diagnóstico. Ese esfuerzo colectivo, tan poco común en la academia mexicana, es quizá el mayor valor de la obra, dado que permite observar patrones, contrastar sectores y desmontar percepciones demasiado instaladas en la discusión pública.

Un acierto adicional es que el libro evita caer en la polarización que suele rodear al obradorismo. Las contribuciones no se redactan desde trincheras ideológicas rígidas, sino desde un ánimo exploratorio que busca entender qué cambió y qué no en el repertorio de acción colectiva. Ese tono crítico pero cuidadoso facilita una lectura abierta, más preocupada por comprender procesos que por dictar sentencias.

Ahora bien, como toda obra que intenta cubrir un campo tan vasto, deja zonas que invitan a un análisis más profundo. Por ejemplo, aunque el concepto de “pax obradorista” es sugerente y útil para caracterizar la contención de la protesta, todavía falta dimensionar con más precisión su alcance real en distintos territorios, sobre todo en aquellos donde las tensiones se manifestaron de forma desigual. También sería interesante ampliar, en futuras investigaciones, la parte comparativa: qué distingue al caso mexicano frente a otros progresismos latinoamericanos recientes y cómo interactúan las particularidades locales con tendencias regionales más amplias.



CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO



INESLE
INSTITUTO
DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS

Asimismo, algunos capítulos plantean preguntas que merecen un seguimiento más meticuloso, como el efecto de los programas sociales en la organización comunitaria, la evolución de la vida interna de Morena más allá de los ciclos electorales o los matices dentro del movimiento feminista, cuya diversidad interna podría ser explorada con mayor riqueza.

Definitivamente, el libro ofrece una fotografía valiosa y bien argumentada del sexenio, consciente de sus propias limitaciones y abierto a debates futuros. Es un punto de partida sólido para seguir discutiendo, con calma y rigor, la compleja relación entre Estado, movimientos sociales y participación política en el México contemporáneo.



CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO



INESLE
INSTITUTO
DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS

TE INVITAMOS A LEER

TRANSFORMACIÓN LEGISLATIVA

NÚMERO ESPECIAL

L



CONGRESO
ESTADO DE
MÉXICO



CIÓN



CONGRESO
ESTADO DE MÉXICO



INESLE
INSTITUTO
DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS

TRANSFORMACIÓN LEGISLATIVA

Número especial

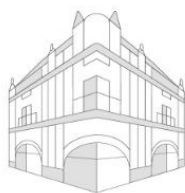
VOLUMEN 1

2025

www.inesle.gob.mx/transformacionlegislativa



PRIMER CONGRESO
ESTADO DE
MÉXICO



CONGRESO

ESTADO DE MÉXICO



INESLE

INSTITUTO
DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS

LUCHAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL SEXENIO OBRADORISTA (2018-2024)

El uso de la información contenida en esta síntesis es exclusivamente con fines educativos y de difusión cultural, sin fines de lucro, con el único propósito de fomentar el interés por la lectura y el conocimiento de la obra original.

ELABORADO POR
LUIS ALBERTO VALDEZ HERNÁNDEZ

Elaborado en colaboración con el
Comité Permanente de Estudios Legislativos del
Congreso del Estado de México.

722 279 6400 Ext. 3003 / www.inesle.gob.mx
Av. Hidalgo Pte, #405 Col. La Merced-Alameda,
Toluca, Estado de México, C.P. 50080